

José Domingo Domingo, Presidente de la Asociación Impulso Ciudadano, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ Industria núm. 60, Local 7 de Barcelona (info@impulsociudadano.es), comparece y como mejor proceda en Derecho, MANIFIESTA:

PRIMERO.- El Pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión núm. 82 de fecha 30 de junio de 2010 (Diario de sesiones del Parlamento de Cataluña-Pleno núm. 125) aprobó la **Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña (CCC)** que ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Parlamento núm. 779, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña núm. 5677 de fecha 23 de julio de 2010 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 179 de fecha 13 de agosto de 2010.

El CCC tiene por objeto garantizar la defensa y la protección de los derechos de las personas consumidoras y establecer, en el ámbito territorial de Cataluña, los principios y normas que deben regirlas para mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras (art. 111.1). Por su parte, y a los efectos de esta solicitud de interposición de recurso, interesa destacar que el capítulo VIII del Título II del Libro I se refiere al derecho a recibir información y a la utilización de las lenguas oficiales, e incorpora este derecho a los derechos básicos de las personas consumidoras y desarrolla así el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC).

SEGUNDO.- Precisamente, el artículo 34 EAC ha sido objeto de interpretación constitucional por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 que, en su fundamento jurídico 22, ha establecido que el citado precepto extiende al ámbito de las relaciones *interprivatos* el derecho de opción lingüística que asiste a los ciudadanos frente al poder público y salva la constitucionalidad del citado precepto siempre que sea interpretado conforme a los siguientes parámetros:

- Ese derecho ha de comprender por igual y con perfecta equivalencia a las dos lenguas oficiales en Cataluña.

- El deber de disponibilidad lingüística por parte de las empresas es necesaria consecuencia del derecho de opción lingüística y, en concreto, del derecho de los usuarios y consumidores a ser atendidos en la lengua oficial que elijan, que se declara en el primer inciso del art. 34 EAC.

- La proclamación *in abstracto* de aquel deber, en los términos en los que se lleva a cabo por el precepto recurrido, no atenta por sí misma contra el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, contra la libertad de empresa o contra el libre desplazamiento de personas y mercancías que están sometidos, como todos los derechos y libertades, a límites (respectivamente, SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 3; 37/1987, de 26 de marzo, FJ 4; y 64/1990, de 5 de abril, FJ 5).

- La definición, contenido y alcance del deber de disponibilidad lingüística **quedan diferidos en el art. 34 EAC a los términos que establezca la ley, de modo que habrá de ser con ocasión del juicio de constitucionalidad que eventualmente haya de merecer la ley por la que, en el marco de la oportuna competencia, se establezcan los términos de ese deber de disponibilidad lingüística** cuando quepa esperar del Tribunal Constitucional un pronunciamiento jurisdiccional sobre la adecuación constitucional de los concretos términos en los que se articule dicho deber.

- **“El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas,** toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello, en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos”.

TERCERO.- Deben valorarse, por lo tanto, los términos de la regulación del deber de disponibilidad y examinar **“in concreto”** la misma a efectos del juicio de constitucionalidad del CCC.

La normativa objeto de estudio es la siguiente:

El título II del libro primero regula los derechos básicos de las personas consumidoras y, su **capítulo VIII**, bajo la rúbrica de «Derechos lingüísticos» se refiere al «derecho de recibir información y a la utilización de las lenguas oficiales», incorporando -en palabras del legislador- «este derecho a los derechos básicos de las personas consumidoras y despliega así el artículo 34 del Estatuto.»

El citado capítulo está integrado por el **artículo 128.1** que con el título “Derechos lingüísticos de las personas consumidoras” dispone lo siguiente:

1. Las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de autonomía y la legislación aplicable en materia lingüística, **a ser atendidas oralmente y por escrito** en la lengua oficial que escojan.

2. Las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, **tienen derecho a recibir en catalán:**

Las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los demás documentos que se refieran o que se deriven de ellos.

Las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad.

Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentación que se refiera a ellos o que se derive de la realización de alguno de estos contratos.

3. La Generalidad debe velar por el fomento en las relaciones de consumo del uso de la lengua occitana, denominada aranés en Arán, dentro del ámbito territorial de Arán, donde es lengua propia.

Esta normativa ha de ser completada con otros preceptos. En concreto, los artículos **112-I** (los derechos de las personas consumidoras como derechos básicos objeto de protección especial) y **121-2** sobre los derechos protegidos, ya que en el epígrafe de la letra g) se establece que los derechos lingüísticos

regulados en el citado código forman parte de los «derechos de las personas consumidoras protegidos por esta ley».

Asimismo, el artículo **211-5**, referido a los «**requisitos lingüísticos**», contiene dos previsiones:

- Por una parte, establece **la obligación de poner inmediatamente** a disposición de los consumidores la documentación y las informaciones necesarias para el consumo a que hace referencia el artículo 128-1. Esta obligación se exceptúa, sin embargo, para las marcas, los nombres comerciales y la rotulación, sometidas a la legislación de la propiedad industrial.

- De otra, sin perjuicio de lo que prevé la legislación de política lingüística y otras leyes que puedan resultar aplicables, incorpora un mandato dirigido a las administraciones públicas para que promuevan, impulsen y fomenten las obligaciones lingüísticas que establece el Proyecto de Ley, especialmente para los establecimientos más vinculados al sector público (los que ocupan dominio público y las empresas concesionarias).

De forma destacada, al objeto de la presente solicitud, se debe considerar el **artículo 331-6.k**, que entre **las infracciones administrativas** que tipifica, incluye la que consiste en «Vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa».

Por su parte, la **Disposición Final Primera** salva las referencias en materia de consumo hechas a la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, y a la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios, que se entienden hechas a la presente ley.

Es significativo que la Mesa del Parlamento de Cataluña aprobó el Código de Consumo de Cataluña en el pleno del día 30 de junio, a pesar de que los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto solicitaron el aplazamiento del debate y votación (DOCUMENTO NUM. UNO) a la espera de conocer el contenido de los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Constitucional, de la cual sólo se había dado anticipado a la Cámara el fallo en el que figuraba la interpretación a dar del artículo 34 del estatuto de autonomía pero no el cuerpo de la sentencia. Es evidente que de haberse acogido esta petición, probablemente ahora no tendría que plantearse recurso de

inconstitucionalidad, pues los términos de algunos preceptos incumplen claramente la normativa constitucional como ahora se expondrá.

CUARTO.- Como cuestión previa se debe traer por la conexión que tiene con la disponibilidad lingüística lo relativo a la constitucionalidad de la imposición estatutaria del deber de conocimiento del catalán (art. 6.2 EAC).

El Tribunal Constitucional, en el Fundamento jurídico 14 de la sentencia de 28 de junio resuelve partiendo de la base de que “tal deber no viene impuesto por la Constitución y no es inherente a la cooficialidad”. En este sentido, aclara que el art. 3.1 de la Constitución establece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado; “deber que resulta concordante con otras disposiciones constitucionales que reconocen la existencia de un idioma común a todos los españoles, y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas Comunidades Autónomas, pues el citado artículo no establece para ellas ese deber” (STC 84/1986, de 26 de junio, FJ 2).

Añade el Pleno del Tribunal Constitucional que: “El deber constitucional de conocimiento del castellano, antes que un deber “individualizado y exigible” (STC 82/1986, FJ 2) de conocimiento de esa lengua, es en realidad el contrapunto de la facultad del poder público de utilizarla como medio de comunicación normal con los ciudadanos sin que éstos puedan exigirle la utilización de otra para que los actos de *imperium* que son objeto de comunicación desplieguen de manera regular sus efectos jurídicos. En el caso de las lenguas cooficiales distintas del castellano no existe para los poderes públicos una facultad equivalente, pues los ciudadanos residentes en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales tienen derecho a utilizar ambas en sus relaciones con la autoridad y sólo obligación —constitucional— de conocer el castellano, lo que garantiza la comunicación con el poder público sin necesidad de exigir el conocimiento de una segunda lengua.”

Esa conclusión conlleva que no cabe de los catalanes presumir el conocimiento de la lengua catalana ni mucho menos del resto de los españoles o extranjeros. Es más, el Tribunal Constitucional dispone que el art. 6.2 EAC sería inconstitucional y nulo en su pretensión de imponer un deber de conocimiento

del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano.

No existe, por lo tanto, un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, de conocimiento de la lengua catalana, y el Tribunal Constitucional concreta la imposición de un deber individual y de obligado cumplimiento que tiene su lugar específico y propio en el ámbito de la educación, según resulta del art. 35.2 EAC, y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios, obligados a dar satisfacción al derecho de opción lingüística reconocido en el art. 33.1 EAC. Pero no en otros ámbitos.

Insiste el Tribunal en que este deber no es jurídicamente exigible con carácter generalizado y fuera del ámbito educativo y el de las relaciones con el personal al servicio de la Administración, no cabe predicarlo. Por lo tanto, **no puede exigirse el deber de conocer el catalán en las relaciones de consumo** y por ello, el deber de disponibilidad lingüística en los términos que se contempla en el artículo 128.1.1 y 2 del CCC ha de ser entendido inconstitucional en cuanto que obliga en las relaciones *inter privatos* a tener conocimiento del catalán lo que no es conforme al artículo 3 de la Constitución, de acuerdo con la interpretación dada por el Tribunal Constitucional.

Es más, y en directa conexión con lo anterior, se ha de contemplar las consecuencias que puede conllevar la exigencia de ese conocimiento para las empresas y el personal a su servicio que puede suponer, incluso, que algunos trabajadores pierdan su actual puesto de trabajo por despido por causas objetivas debido a su “**ineptitud** sobrevenida” o “por falta de adaptación a las modificaciones”, derivadas de su desconocimiento de la lengua catalana dado que según el artículo 128.1 del Código de Consumo de Cataluña las personas consumidoras tiene derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en cualquiera de las lenguas oficiales, esto es en catalán o en castellano.

QUINTO- El Tribunal Constitucional declara que el derecho a la opción lingüística ha de comprender por igual y con perfecta equivalencia a las dos lenguas oficiales en Cataluña y que esta se altera, desde el momento que en el artículo 128.1.2 sólo se reconoce a las personas consumidoras el **derecho a recibir en catalán:**

“Las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los demás documentos que se refieran o que se deriven de ellos.

Las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad.

Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentación que se refiera a ellos o que se derive de la realización de alguno de estos contratos.”

Es evidente que, a pesar de los esfuerzos “titánicos” que realizó el Consejo de Garantías Estatutarias en el Dictamen 9/2001, de 21 de junio, sobre el Proyecto de Ley del Código de Consumo de Cataluña (DOCUMENTO NUM. DOS) para tratar de salvar la igualdad de derechos de las personas consumidoras catalanohablantes y castellanohablantes, la norma discrimina y lo hace intencionadamente, de manera que sólo existen derechos a recibir en catalán los documentos y las informaciones en las relaciones de consumo que se relacionan en el artículo 128 y no se contempla el mismo derecho a recibirlos en castellano. Este derecho conlleva la recíproca obligación para las empresas y no otra. A la vista de la práctica administrativa relacionada con la aplicación del principio “al menos en catalán” que se contemplaba en los artículos 15 y 32.3 de la Ley de Política Lingüística de 1998 se ha comprobado que esa expresión ha tenido importantes consecuencias en el ámbito punitivo que han afectado a miles de empresarios catalanes que han sido inspeccionados, en su caso expedientados y, finalmente sancionados. Pues bien, la aplicación de ese principio, no se ha presumido a favor del derecho a obtener la documentación o la información en castellano, de manera que la regulación ha supuesto la exigencia directa, inmediata y rigurosa a los empresarios de incluir en sus documentos y rotulaciones la lengua catalana, pero no así la lengua castellana. Buena prueba de ello es que, según datos del propio Gobierno de la Generalitat, constan impuestas 2 multas en el año 2003 por importe de 1200 euros; 22 multas en el año 2004 por importe de 46.300 euros; 119 multas en el año 2005 por importe de 122.050 euros; 194 multas en el año 2006 por importe de 55.675 euros; 209 multas por importe de 208.000 euros y 152 multas por importe de 148.100 euros en el año 2009. Por cierto, en este último año se llevaron a cabo más de 3000 actuaciones inspectores por motivos lingüísticos y más de 2800

comerciantes decidieron efectuar el cambio de la señalización o de la documentación para no ser sancionados.

El artículo 128.1.2 no da igual equivalencia a las dos lenguas oficiales y, por lo tanto, ha de entenderse inconstitucional.

SEXTO.- El Tribunal Constitucional tiene declarado que **“El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas,** toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello, en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos”.

De lo expuesto, es evidente que el primer apartado del artículo 211.5.1 es inconstitucional en cuanto que literalmente prevé: “La documentación y las informaciones necesarias para el consumo y el uso adecuados de los bienes y servicios dirigidas a las personas consumidoras deben estar a disposición inmediata de estas, de acuerdo con lo establecido por el [artículo 128-1](#). “

Es así, que se prevé que toda la documentación e información regulada en el artículo 128.1.2 y que la atención oral y por escrito al cliente prevista en el artículo 128.1.1 debe tener carácter inmediato, lo que viene es declarado inconstitucional en el Fundamento Jurídico 22 de la sentencia.

El aspecto sustancial del párrafo antes transcrito recae, no obstante, en el hecho de que el **deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas.** Por lo tanto, si ese deber no es exigible, la consecuencia inmediata será que no puede ser considerado **infracción administrativa** la vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa, puesto que estas obligaciones con carácter inmediato, general y directo sólo son exigibles a los poderes públicos, pero no a las personas

privadas. De aquí cabe concluir que se debe considerar inconstitucional el artículo 331-6.k del CCC.

SEPTIMO.- La concreción en los preceptos anteriores del Código de Consumo de Cataluña del deber de disponibilidad lingüística que *in abstracto* realiza el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en este caso sí atenta contra el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, contra la libertad de empresa o contra el libre desplazamiento de personas y mercancías que están sometidos, como todos los derechos y libertades y hay que entender que vulneran los artículos 10.1, 38 y 139 de la Constitución española.

OCTAVO.- la **Disposición Final Primera** salva las referencias en materia de consumo hechas a la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, y a la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios, que se entienden hechas a la presente ley.

Pues bien, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, desde luego la interpretación generosa que realizó el Defensor del Pueblo en las sugerencias y recomendaciones que formuló en 8 de abril de 1998 sobre la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística a favor de la constitucionalidad de la norma no hubiera sido posible y por ello, parece conveniente que esta institución solicite del Tribunal Constitucional que haga juicio de constitucionalidad del artículo 2.2 en el que se declara que “el catalán como lengua propia” es la “lengua preferentemente utilizada “por las empresas y entidades que ofrecen servicios al público” siendo que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional asociar el efecto preferente al concepto de lengua propia porque este efecto es extraño al concepto de lengua oficial. También deben ser declarados inconstitucionales el artículo 15.5 sobre la obligación de utilizar el catalán en documentos de giro o tráfico de las entidades financieras; y los números 1 y 3 del artículo 32, todos ellos de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, en cuanto contienen mandatos claramente contrarios a la doctrina que antes se ha citado.

Las sospechas de inconstitucionalidad ya estaban presentes en el escrito del Defensor del Pueblo y buena prueba de ello son las siguientes consideraciones que a continuación se reproducen:

No es constitucionalmente legítimo imponer un deber general de conocimiento de la lengua catalana a todos los ciudadanos de Cataluña. (...) En conformidad con lo anterior, se hace preciso que en el desarrollo normativo de la Ley de Política Lingüística, o en la aplicación de la misma, no se adopten medidas que

de una u otra forma presupongan la existencia de un deber general de conocimiento de la lengua catalana, predicable de los ciudadanos residentes en Cataluña (Consideración Primera).

En el “uso de la lengua por parte de los ciudadanos particulares o, mejor dicho, por las personas físicas y jurídicas de carácter privado en sus relaciones mutuas y no en el ámbito de lo “oficial” rige la regla “de la libertad, y el uso de la lengua –cualquier lengua, en último término- es, en todo caso, un derecho y no un deber o una obligación.” En la argumentación del Defensor del Pueblo, advirtió que el artículo 10.1 CE recuerda “que el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás, son fundamentos del orden político y de la paz social” y que “la libertad de desenvolvimiento personal, considerada en la Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1.), como principio (art. 10.1) y como derecho, tiene en este último aspecto múltiples manifestaciones entre las que ocupa un lugar preferente la libertad de expresión (art. 20.1 CE). “En definitiva, en el marco general de libertad que ha de presidir la vida del ciudadano, éste encuentra reconocido su derecho al libre uso de la lengua de su preferencia en la libertad de expresión que la Constitución proclama y garantiza”. Continúa el Defensor del Pueblo que “partiendo de ese principio general, la libertad de lengua” en “el ámbito de las relaciones privadas debe quedar exento de toda imposición lingüística por parte de los poderes públicos” que “no pueden ni deben imponer una regulación concreta que sea contraria a la libertad de opción lingüística”. NI el concepto de “lengua propia” ni el concepto de “lengua oficial” ampara la imposición de la lengua en las relaciones *inter privatos* y “si esto llegase a realizarse, se habría liquidado el concepto de “lengua oficial”, y se pasaría al de “lengua obligatoria” en ejecución de un modelo de ordenación lingüística que estaría en contradicción con el diseño constitucional de respeto a los derechos y libertades vigente en la actualidad.

Asimismo, en el ámbito de **las empresas**, “debe tenerse en cuenta que cualquier actuación de los poderes públicos respecto de las cuestiones lingüísticas tiene que respetar la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución” y, por ello, el empresario “debe tener la capacidad de perfilar cuál va a ser su oferta, la forma en que desea exponerla, la determinación de a qué público quiere llegar, y la lengua que desea utilizar para todo ello. Todas estas decisiones forman parte del núcleo primario de libertad que debe ser protegido de toda ingerencia ilegítima y que procede

entender comprendido dentro de la propia libertad de empresa". "La Generalidad, como cualquier otro poder público, está limitada en sus facultades por el respeto que debe a los ámbitos privados" (Consideración segunda A).

El marco general antes descrito se concreta en el escrito del Defensor del Pueblo en las consideraciones que hizo sobre el artículo 2.2 en la que establecía que "el catalán como lengua propia" es la "lengua preferentemente utilizada "por las empresas y entidades que ofrecen servicios al público"; en el artículo 15.5 sobre la obligación de utilizar el catalán en documentos de giro o tráfico de las entidades financieras; y en los números 1 y 3 del artículo 32 por que el que se dice lo siguiente:

- 1.- "las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña"

- 3.- La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de ofertas de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial"

En relación con lo anterior, entendió el Defensor del Pueblo que la obligación era sólo de conocimiento pasivo de la lengua, en lo que hace referencia a la disponibilidad para atender a los consumidores, y que resultaba desproporcionado "un uso obligatoria y general de la lengua catalana en toda la señalización, los carteles de información de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios, sin permitir que el titular del establecimiento o empresa de que se trate pueda decidir en cada caso lo que resulte más oportuno". En el año 1998, ya consideraba que existía una desproporción entre objetivos y fines y por ello consideraba conveniente la "modificación de la misma en el sentido de transformarla en una medida puramente de fomento, o, al menos considerar que pueden establecerse según el prudente criterio del titular de la empresa o establecimiento". También consideró el Defensor del Pueblo que "la previsión establecida por la disposición adicional quinta, letra b), de la ley, al estimar que la infracción de lo dispuesto en el artículo 32.2 se entenderá "una negativa

injustificada a satisfacer las demandas de las personas usuarias y consumidoras, a las que debe aplicarse el régimen sancionador que establece la ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y usuarios” resultaba desproporcionada con el objetivo que perseguía y, por ello, advirtió que el fin de la normalización de la lengua catalana en este ámbito debía poder conseguirse por el fomento y promoción del uso del catalán, pero no mediante la imposición coactiva. Por ello, aludió a que resultaría muy oportuna la modificación de la disposición adicional quinta, letra b) de la ley de política Lingüística, al objeto de excluir de la misma toda mención al artículo 32.2 (Consideración segunda D).

Por todo lo anterior,

SOLICITA: Que haciendo uso de la facultad que le confiere la Constitución y la Ley reguladora del Defensor del Pueblo, ESTA Institución:

Interponga recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 128.1, 211.5.1, 331.6. k) y Disposición Final Primera de **Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña** (CCC) por considerar su contenido contrario al artículo 3.1, 10.1, 14, 38 y 139 de la Constitución española .

Igualmente solicite del Tribunal Constitucional que al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de los artículos 2.2 , 15.5, números 1 y 3 del artículo 32, y Disposición Adicional Quinta, letra b) de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, por serle de aplicación la doctrina contenida en la sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional, y ser contrarios a los artículos . 3.1, 10.1, 14, 38 y 139 de la Constitución española.

En Madrid, a siete de septiembre de dos mil diez.